

## **Bolivia al día: El primer año de Arce**

Bret Gustafson

En octubre y noviembre de 2019, los enfrentamientos sobre la validez de las elecciones presidenciales en Bolivia condujeron a protestas y a la eventual destitución del presidente indígena de izquierda Evo Morales, en lo que la mayoría de los observadores calificaron como un golpe de Estado. En el año siguiente, el régimen interino, dirigido por Jeanine Añez, supervisó un régimen profundamente represivo que se enfrentó a las protestas en dos ocasiones con matanzas a gran escala por parte de los militares. El año de gobierno de facto se vio agravado por el COVID y por la corrupción, con robos y chanchullos generalizados.

Cuando finalmente se celebraron nuevas elecciones en octubre de 2020, el partido derrocado volvió al poder con un nuevo presidente, Luí Arce. Evo Morales regresó del exilio en Argentina, y el resurgido partido MAS -el "Movimiento al Socialismo"- recuperó el Estado. Ahora, un año después, el presidente Luí Arce sigue lidiando con una oposición de extrema derecha y con los retos de gobernar en un escenario posterior al golpe de Estado en medio de una pandemia. Frente a los continuos esfuerzos de la derecha por desestabilizar al nuevo presidente, los robustos movimientos sociales campesinos y obreros del país, en gran parte rurales e indígenas, siguen saliendo a las calles para ofrecer su continuo apoyo, tanto a Arce como al mandato democrático que obtuvo en las urnas.

Pero más allá de la victoria electoral, la situación de Bolivia es complicada. Luí Arce ha conseguido compaginar la pandemia, la recesión económica y las maquinaciones de la derecha. Por ello, su primer año es un éxito si se mira con el telón de fondo de la situación actual. Bolivia ha recibido una mezcla de vacunas -de Rusia, China, Estados Unidos y Argentina- y ha intentado febrilmente que lleguen a los brazos de la gente. El gobierno también ha estado recogiendo metódicamente a los acusados de participar en el golpe de Estado de 2019 y los ha encarcelado. Esto se ha producido tras el clamor popular de justicia para las víctimas de la violencia del ejército, así como tras un informe mordaz de un "Grupo de Expertos Independientes" (GIEI). Respaldado por la OEA (y financiado en parte por Estados Unidos), el GIEI llevó a cabo una investigación exhaustiva y elaboró un informe en el que se detallaban numerosos abusos de los derechos humanos y se confirmaban las dos masacres perpetradas por el régimen golpista a finales de 2019. Tras la destitución de Morales, la marea de la opinión internacional parecía adoptar el argumento de que Morales fue destituido legítimamente a raíz de un fraude, en gran parte gracias a los esfuerzos de la OEA y de los propios Estados Unidos. Pero el trabajo de una serie de

investigadores académicos ha desacreditado las "pruebas" de la OEA para el golpe. Y el informe del GIEI, en contra de lo que muchos esperaban, ha documentado realmente los graves abusos del régimen golpista. La opinión internacional -y los hechos- se inclinan ahora en la otra dirección.

Aun así, en los últimos meses la oposición de derechas, desde su base geográfica en la ciudad oriental boliviana de Santa Cruz, ha ido pasando de una táctica a otra en un esfuerzo por mantener al gobierno de Arce en sus trece. Los motivos ostensibles son variados. Inmediatamente después de la victoria de Arce en octubre de 2020, un pequeño segmento de la derecha trató de movilizar las denuncias de fraude una vez más. Dado el reconocimiento internacional de que Arce ganó en unas elecciones libres y justas, ese esfuerzo se desvaneció. Unas semanas más tarde, cuando el gobierno comenzó a encarcelar a los responsables del golpe, la oposición volvió a convocar un paro nacional, alegando que había una caza de brujas política en marcha. Ese esfuerzo se basó en una división que sigue existiendo en Bolivia: entre los que creen que los acontecimientos de 2019 fueron un golpe de Estado y los que creen que la agitación fue precipitada por el intento de fraude electoral de Evo Morales. La división "golpe vs fraude" sigue siendo un abismo. La base de apoyo mayoritaria rural y urbana del MAS está en un lado (fue un golpe), mientras que las clases altas y medias, mayoritariamente urbanas, de la oposición están en el otro (fue un fraude). El hecho de que este último sector controle la mayoría de los medios de comunicación hace que el mensaje del fraude -y la historia de la "persecución política"- sea un bombardeo diario constante.

Sin embargo, este paro nacional también se esfumó. Así que la oposición intentó otra táctica: oponerse a una nueva ley destinada a detener el blanqueo de dinero generalizado. En este caso, la oposición consiguió más fuerza, alegando que algunas disposiciones de la ley aumentaban los poderes de vigilancia y de citación del Estado y constituían una violación de los derechos de los ciudadanos. Tras varios días de bloqueos, marchas y enfrentamientos, el gobierno se vio obligado a retroceder, dando a la derecha una victoria simbólica. Y, mientras varios militares e incluso la ex presidenta (de facto) Jeanine Añez están en la cárcel a la espera de ser juzgados, el gobierno no ha querido o no ha podido perseguir a uno de los principales protagonistas del golpe: Luís Fernando Camacho. Después de estar al frente del esfuerzo por derrocar a Evo Morales en 2019 -e incluso jactarse de que su padre había pagado a la policía para que se amotinara- Camacho regresó a su bastión regional de Santa Cruz para participar en las elecciones locales como candidato a gobernador. En marzo de 2021 fue elegido gobernador. Aunque su popularidad se limita a esa región oriental, el gobierno nacional no ha actuado para detenerlo por su papel en el golpe. Esto es un reconocimiento tácito de la debilidad del gobierno, reconociendo que la administración de Arce no tiene el poder suficiente para resistir la reacción que tal movimiento podría provocar.

Así, mientras que numéricamente el MAS y Arce gozan del apoyo de una mayoría popular, con gran parte de este respaldo en las zonas rurales, en las ciudades y en los medios de comunicación la situación se parece más a un estancamiento polarizado. Como escribió recientemente el analista boliviano Fernando Molina, no está del todo claro si el gobierno será capaz de procesar con éxito a los que ha encarcelado. En el caso de varias acusaciones de corrupción durante el régimen golpista, el caso es un poco más fácil. De hecho, el ex ministro de Gobernación del gobierno golpista, Arturo Molina, está sentado en una celda de Miami en este momento, acusado por las autoridades estadounidenses por su propio lavado de dinero realizado mientras estaba en el cargo. Sin embargo, para los acusados de participar en el golpe, las cosas son más complicadas. Para procesar a la ex presidenta Jeanine Añez, el gobierno necesita una mayoría de 2/3 en el Congreso, voto que no tiene. Con los detalles de los abusos del régimen golpista ahora documentados por el informe del GIEI, el informe no pesó en el debate golpe vs. fraude, dejando la narrativa en gran parte en manos de un público dividido.

Aun así, Arce mantiene una amplia popularidad en Bolivia y el regreso de la derecha no es inminente. Sin embargo, todavía hay una serie de incertidumbres y desafíos por delante. El primero es el resurgimiento de la pandemia, con tasas de infección crecientes a pesar de los esfuerzos de vacunación. El segundo es el económico. Tras un pésimo año económico en 2020, la tasa de crecimiento de Bolivia ha repuntado y se prevé un 5,1% para 2021, la media de Sudamérica. Pero los altos niveles de ingresos por exportaciones de gas natural han disminuido. En el período transcurrido desde su primera elección en 2006, los ingresos del gas permitieron a Evo Morales redistribuir la riqueza y aumentar el gasto público, lo que tuvo efectos positivos en la economía en general. Pero en 2014 los ingresos del gas iniciaron un precipitado descenso. Los gobiernos nacionales, regionales y municipales, que habían participado en la generosidad, se enfrentan ahora a profundos recortes. La posibilidad de que vuelva el boom del gas es pequeña. Muchos observadores y bolivianos se fijan ahora en el litio. Los grandes yacimientos de litio de Bolivia, situados principalmente en el departamento de Potosí, pueden prometer alguna bonanza futura. Sin embargo, el departamento de Potosí, no por casualidad, también ha sido una espina en el costado del gobierno nacional. Uno de sus dirigentes, Marco Pumari, fue el compinche de Camacho durante el golpe de Estado de 2019. Mientras Camacho sigue libre, Pumari ha sido encarcelado. Las tensiones nacionales y regionales, que han caracterizado durante mucho tiempo la relación con Santa Cruz, también se están cocinando a fuego lento en torno al tema del litio y Potosí. El gobierno de Arce no sólo tiene que lidiar con la competencia internacional por los derechos de explotación de los yacimientos de litio de Bolivia, sino también con las luchas internas vinculadas a la gestión de la riqueza que puedan generar esos yacimientos.

Incluso con todos estos retos, el escenario en Bolivia es mucho mejor de lo que podría haber sido, y la trayectoria más amplia de América Latina parece también

prometedora. En Bolivia, la derecha no tiene el poder de movilización de un Trump o un Bolsonaro (como en Brasil). Aunque es difícil decir qué acontecimientos podrían desestabilizar al gobierno de Arce, por el momento la situación es mucho mejor de lo que habría sido con un régimen golpista prolongado o con el regreso de los partidos políticos neoliberales de la vieja guardia. También en América Latina las cosas están tomando un modesto giro a mejor. Junto con la reciente y abrumadora victoria del izquierdista Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro, una socialista democrática, ha sido elegida para la presidencia en el perenne perro faldero de Estados Unidos, Honduras. Dejando a un lado los problemas de Nicaragua y Venezuela -complicados por sí mismos-, la reelección de Lula da Silva en Brasil (si no hay un golpe militar) también se producirá probablemente en 2022. Con las tres economías más grandes de Sudamérica -Argentina, Brasil y Chile- todas vecinas de Bolivia, y todas bajo gobiernos de izquierda, el proceso histórico de cambio de Bolivia parece tener varios años más para trabajar en su tarea inconclusa: la descolonización social y económica más profunda y la democratización del Estado. Las cosas podrían ser peores.

Fuente: *New Politics*

<https://newpol.org/bolivia-update-arces-first-year/>

Bret Gustafson es professor de antropología en la Washington University de St Louis. Recientemente ha publicado, *Bolivia in the Age of Gas*.